



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Demandantes: JOHNNATAN BEDOYA LÓPEZ, MARISOL RAIGOSA TORO y
SALOMÉ BEDOYA RAIGOSA
Demandados: PIERRE ALAIN BINDER DE BOURMONT e INVERSIONES SPM
S.A.S.
Radicado: 05001 31 05 006 2022 00222 01
Decisión: A-069

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de los demandados, en contra del auto proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín el 8 de febrero de 2023 mediante el cual se accedió a imponer la medida cautelar de caución solicitada.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante auto escrito, aprobado previamente por los integrantes de la Sala.

A N T E C E D E N T E S :

En el proceso de la referencia, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia especial llevada a cabo el 8 de febrero de 2023, decidió imponer caución a los demandados por valor de \$200`000.000 en los términos del artículo 85a del Código Procesal

Laboral y de la Seguridad Social, debido a las acciones tendiente a insolventarse que ha venido adelantando, con la obligación de hacerlo so pena de no ser oído en juicio.

Inconforme con tal decisión, el apoderado judicial de la parte demandada presentó recurso de apelación indicando que no se ha probado la mala fe que no se prueba con la venta de un bien inmueble. Agrega que esa venta es un acto conocido por el demandante como consta en el hecho 11 donde indica que su despido el 27 de abril de 2021 se argumentó en que se iba a vender la finca y han transcurrido casi 2 años a partir del momento que él tuvo conocimiento de tal situación.

Manifiesta que el inmueble siempre ha estado en venta, es decir que el despido no fue un hecho posterior, aunque la venta tenga fecha a partir del 30 de noviembre de 2022 que fue la fecha en la que se finiquitó el negocio, durante mucho tiempo se tuvo conocimiento de ello. Tampoco puede asegurarse que en una sentencia en contra de los demandados los mismos no vayan a cumplir con la obligación y que la empresa carezca de recursos para pagar una condena en su contra; así mismo manifiesta que las pruebas que se han debatido en el proceso no son suficientes para declarar una responsabilidad directa ni del señor ALAIN ni de INVERSIONES SPM y que no se cumple con los requisitos del artículo 85ª del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, así como tampoco la necesidad de su decreto.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

En el término del traslado para alegar, los apoderados de las partes no realizaron pronunciamiento alguno.

C O N S I D E R A C I O N E S :

La medida cautelar dentro del proceso ordinario laboral, reglada en el art. 85 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, adicionado por el art. 37 A de la Ley 712 de 2001, procede cuando el juez considere que las resultas del proceso pueden ser desconocidas por la parte accionada, en el evento de resultar vencida.

La disposición prescribe como presupuestos para la procedencia de la medida, los siguientes: (i) que se adopte a solicitud de parte; (ii) en la solicitud, que se entiende hecha bajo la gravedad del juramento, se deben indicar los motivos y los hechos en que se funda; (iii) que se refiera a la ejecución de actos efectuados por el demandado tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, según lo considere el juez, o incluso cuando éste estime que aquel se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, y (iv) que la medida se sustente en las pruebas aportadas acerca de la situación alegada, presentadas en la audiencia especial que cite el juez.

Al declarar la exequibilidad de la norma mediante sentencia C-379 del 27 de abril de 2004, la Corte Constitucional dijo, entre otras cosas, lo siguiente:

“Para la Corte, las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido.

(...)

Ahora bien, la caución, definida en el código civil, significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Es decir, dentro de cualquier proceso, la caución como una medida cautelar que es, tiene la finalidad de asegurar el cumplimiento de la sentencia y por ello, puede entenderse como un medio para asegurar el resultado.

Por su naturaleza, la caución sirve para el resarcimiento de perjuicios a favor del demandante hasta un monto determinado, que en el caso de la norma acusada el legislador señaló que debe oscilar entre el 30 y 50 % del valor de la pretensión al momento de decretarse la medida cautelar. Al respecto, en Sentencia C-316 de 2002, la Corte afirmó que “en términos generales, el sistema jurídico reconoce que las cauciones son garantías suscritas por los sujetos procesales destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por éstos durante el proceso, así como a garantizar el pago de los perjuicios que sus actuaciones procesales pudieran generar a la parte contra la cual se dirigen.

Así entonces, mediante el compromiso personal o económico que se deriva de la suscripción de una caución, el individuo involucrado en un procedimiento determinado (1) manifiesta su voluntad de cumplir con los deberes impuestos en el trámite de las diligencias y, además (2) garantiza el pago de los perjuicios que algunas de sus actuaciones procesales pudieran ocasionar a la contraparte. Las cauciones operan entonces como mecanismo de seguridad e indemnización dentro del proceso”.

(...)

“Por tanto, la razón de ser de la medida, es precisamente evitar el desconocimiento de la sentencia, pues cuando el demandado efectúe actos tendientes a insolventarse, podrá el juez imponer la caución, garantizando el cumplimiento de la misma. Aquí no se desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia, pues como se ve, la decisión se toma después de una valoración y un análisis de las pruebas y sólo cuando el juez considere que las resultas del proceso pueden ser desconocidas, previsión que se justifica en favor del trabajador.

La carga procesal que se impone al demandado no agrava su situación, simplemente cuando el juez considere que se encuentra en serias dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones, y en aras de proteger al trabajador decreta la medida, con el fin de hacer efectiva la orden dada en la sentencia.

(...) Dentro de ese marco, se explica la existencia de las medidas precautorias como un anticipo de lo que podría ser resuelto en la sentencia para que el derecho subjetivo se realice, para que oportunamente cese su vulneración y se otorgue la debida protección reclamada por el actor. Con las medidas cautelares se persigue pues, evitar a lo menos de manera inmediata y en forma provisoria, que se prolongue el desconocimiento del ordenamiento jurídico vulnerado en apariencia, con verosimilitud considerada por la ley como grave, que es lo que la doctrina ha definido como una medida para conjurar el “periculum in mora”.

En el presente caso y contrario a lo que señala el recurrente, se observa que se da cumplimiento a todos los requisitos legales para que la caución solicitada sea ordenada.

El 5 de diciembre de 2022 se presentó la solicitud de “... decreto y práctica de medida cautelar conforme a lo establecido en el artículo 85 A del CPTSS, frente al inmueble, de nombre “el aguacate...”, el cual era de propiedad de la sociedad INVERSIONES SPM S.A.S. y que fundamentó en el hecho haberse registrado una compraventa realizada ante la Notaría Primera de Itagüí mediante Escritura Pública 1791 del 30 de septiembre de 2022.

Con la solicitud, la parte actora acompaña copia del Certificado de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Bárbara correspondiente al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 023-17105 en el que consta que el predio rural denominado “EL AGUACATE”, en el que dice haber laborado el demandante, fue objeto de un contrato de compraventa de INVERSIONES SPM S.A.S. a favor de los señores INÉS SOFÍA

OSPINA ATEHORTÚA y JUAN PABLO RIOS HENÁNDEZ. Anotación que fue registrada el 14 de octubre de 2022 según la escritura pública a la que había hecho referencia la parte demandante en su solicitud.

La documental aportada por la parte actora hace presumir que efectivamente la empresa demandada INVERSIONES SPM S.A.S., se encuentra adelantando acciones tendientes a insolventarse, pues luego de su vinculación al proceso mediante auto del 7 de septiembre de 2022, procedió con la venta del inmueble según la escritura pública del día 30 de ese mismo mes y año, siendo esa una de las opciones que contempla la norma para decretar su imposición, circunstancia que, incluso, ha surgido con posterioridad a la solicitud inicial que en tal sentido se había presentado, además de que para esa época la sociedad demandada no había sido vinculada al proceso.

Lo anterior implica entender que efectivamente se dan los presupuestos del artículo 85A del CPTSS, debiéndose en este aspecto confirmar lo decidido en el auto que se revisa.

Y no es de recibo el argumento del apelante en el sentido de que no quedó demostrada la mala fe de la empresa en tanto esa no es una exigencia que contemple la norma. Tampoco el hecho de considerar que no existen pruebas para declarar una responsabilidad directa de algunos de los demandados, circunstancia que tampoco es relevante para estos efectos.

Sin más consideraciones, se mantendrá la decisión de fecha y origen conocidos, advirtiéndose que, conforme a la parte final de la norma *"Si el demandado no presta la caución en el término de 5 días no será oído hasta tanto cumpla con dicha orden."*

Costas en esta instancia en contra de la parte vencida en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$200.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín el 8 de febrero de 2023.

Costas en esta instancia en contra de la parte vencida en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$200.000.

Se notifica lo resuelto por ESTADOS y se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen.

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N° 051 del 24 de marzo de 2023

Consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado

Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **eb265b20da0b5b821562c62a062879e1572905535e0a4d139253016c945ab707**

Documento generado en 23/03/2023 02:48:18 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>